

28 de 1874.—*Fernando María Astiazaran.*
—A.—P.—*del Rincon.*—A.—P.—*A. Pina.*

*Ejecutoria de la Suprema Corte
de Justicia.*

México, Setiembre 8 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Sonora por los Sres. Antonio Goycoolea y C^a, Tomás Robinson Bours, Quirino Corbolá, Parada y Quiroz, Esteban Ortiz, Modesto Güereño, Almada, Salido Hermanos, Rafael Acuña, Francisco R. Medrano, Bojorquez y Zazuceta, Brígido Gil, José María Espinosa de los Monteros, contra el cobro que les hace el C. Administrador de rentas del Estado del veinticinco por ciento federal, sobre los nueve mil pesos en que contrataron con el Gobierno del Estado, el consumo de la ciudad de Alamos, por un año. Visto el informe de la autoridad responsable; el parecer fiscal y la sentencia del inferior.

Con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitución, se declara: Primero: que es de confirmarse y se confirma por sus propios legales fundamentos, la sentencia del Juez de Distrito que negó el amparo á los quejosos. Segundo: Se le impone á los solicitantes la multa de cien pesos.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Simón Guzmán.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis María Aguilar,* secretario.

Es copia que certifico. México, Noviem-

bre 19 de 1874.—*Enrique Landa,* oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Yuculan por los Sres. Tomás Poveda y C^a y el C. Luis Fuente, contra el C. Administrado de fondos municipales que les cobra el impuesto llamado de media patente.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

Este juicio de amparo promovido por los Sres. Tomás Poveda y C^a y Luis Fuente, se apoya en el artículo 16 de la Constitución federal, porque afirman los actores, que el C. Tesorero de los fondos de este municipio, contra el cual se ha intentado el recurso, al exigirles el pago de la contribucion llamada de media patente que lo motiva, les infiere en sus personas y posesiones una molestia que no procede de autoridad competente, puesto que conforme á las leyes locales preexistentes que citan en su escrito, solo podía ser autoridad competente para hacer la cuotizacion de aquel gravámen municipal, una junta formada del jefe político del municipio, el subdelegado de Hacienda, el fiscal y dos vecinos nombrados por los tres primeros; resultando por consiguiente, sin competencia alguna la Junta que se formó sin la intervencion del subdelegado y del fiscal, cuyo empleo era incompatible con el de diputado que ejerce; y aun sin conocimiento de los dos vecinos que fueron compelidos á suscribir el acuerdo de graduacion; que sin embargo, cumple y ejecuta el expresado Tesorero. No niega este en su adjunto informe, que las leyes citadas por los quejosos previenen, que las indicadas juntas graduadoras se compongan de las personas referidas; y aunque confiesa que el fiscal de Hacienda era también diputado

al tomar asiento en ella; y que por no haber subdelegado, el rematador del ramo ocupó su lugar; sostiene sin embargo, la competencia de dicha junta para regular el impuesto de que se quejan los actores, fundándose, en que los actos del fiscal son válidos aunque *abusivamente* haya sido conservado en ese empleo desde que empezó á ser diputado, porque la Constitución local solo prohíbe nombrar para empleo alguno á quien quiera que haya obtenido ese encargo, desde el día de su elección; pero no impide conservar al agraciado en el que antes estaba ejercitando; y fundándose así mismo, respecto del cambio del subdelegado por el rematador, para defender la competencia de la junta, en que la ley que la establece puede ser y ha sido interpretada por el Ejecutivo del Estado, en virtud de sus facultades, al subrogar ó sustituir á este individuo en lugar de aquel. Tales son los medios de defensa del acto reclamado que emplea el C. Tesorero de los fondos municipales en su adjunto informe, que reasume en conclusión declinando la responsabilidad de los vicios indicados por los quejosos, en cualquiera otra persona; pues él no hace mas que cobrar la mitad del impuesto que cobra la Tesorería general del Estado. Pero el infrascripto no está conforme con semejantes razonamientos aducidos en apoyo del cobro legítimo del impuesto de que se trata; por que si la Constitución política del Estado dice en su artículo 26, como asegura el informante, que no podían ser nombrados por el Ejecutivo del Estado los diputados en ejercicio, por la fuerza indeclinable de una sana lógica debe inferirse, que los que tienen algun empleo de nombramiento del mismo Ejecutivo, dejan de ejercerlo desde el momento en que el pueblo les designa una silla en el Congreso.

De otro modo, conforme á los principios constitucionales del C. Tesorero de los fondos de este municipio, el mismo secretario de Gobierno bien podia ser diputado en ejercicio sin perjuicio del de aquel empleo, si

ya estaba en posesion de él cuando alcanzó el favor del sufragio para otro encargo. En donde falta la letra de la ley, allí debe estar por lo menos el buen juicio para entenderla; y á no ser que se quiera hacer una ofensa al sentido comun, habrá que convenir en que si una ley declara incompatible el ejercicio simultáneo de dos empleos, ó prohíbe obtener uno cuando se ha obtenido otro; para evitar esa incompatibilidad, tendremos que inferir, repito el fiscal, que la existencia del empleo anterior á la elección de diputado, concluye donde comienzan las funciones de este. Así es que si D. Juan Castellanos era fiscal á la vez que miembro de la Legislatura cuando concurrió á la junta graduadora de que se derivan los impuestos reclamados, como lo confiesa el propio funcionario que los ejecuta, su voz y su voto fueron insuficientes para llenar el vacío del Fiscal de Hacienda que la ley reclama en aquella pequeña corporacion de grande poder discrecional, pues el C. Castellanos, por ministerio de la ley, cesó en el desempeño de aquel antiguo empleo, desde el punto en que entró á ejercer su nuevo encargo. Mas permitiendo, sin conceder, que la repetida junta no haya carecido de tan necesario componente, siempre serían nulas sus determinaciones por la falta del subdelegado que tambien ha debido componerla; pues la subrogacion ó sustitucion de él con el rematador, es una verdadera suplantacion; que por muy absoluta que sea la voluntad del Ejecutivo para hacerla en prueba de la soberanía de este Estado Libre y Soberano, no tiene el derecho de reformar la ley so pretexto de interpretarla equitativamente, porque esta es atribucion esclusiva, ó del mismo poder legislativo, si la ley que da es dudosa, ó del Judicial que la aplica. El subdelegado, si no existe como se dice, ha podido ser remplazado con cualquiera otro individuo menos que con el rematador, quien por el hecho mismo de serlo en las graduaciones, estará siempre por las mas subidas, aunque sean

monstruosas, como así atiende á sus intereses personales, en tanto que el Subdelegado solo consulta con mas independencia y equidad los del fisco del cual es empleado público, responsable de sus actos, mientras que el rematador, aunque tambien sea diputado como el C. Juan P. Carrillo, permanece individuo particular con aquel carácter de negociante.

Resulta pues, de todo lo dicho, que la junta de que se derivan las contribuciones reclamadas en este juicio, no es competente conforme á la propia ley de su institucion, para haberlas acordado; y que por consiguiente se viola en los quejosos el art. 16 de la Constitucion de la República, con fundamentos del cual y del 106 del mismo Código político, el fiscal pide declare V. que la Justicia de la Union ampara y protege á los Sres. D. Tomas Poveda y C^a y D. Luis Fuente del comercio de esta Ciudad, contra los actos del C. Tesorero de los fondos municipales de la misma que les ejecuta el pago de un impuesto acordado por una junta incompetente para el efecto; causándoles de ese modo no solo las molestias prohibidas por el citado art. 16, sino tratándolos de hacer efectiva una especie de pena mas grave y trascendental que la que impusiera un Tribunal, con infraccion del art. 14 de la propia Constitucion de la República, en virtud de que no haya sido previamente establecida por la ley.

Mérida, Julio 30 de 1874.—*P. Hijuelos.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Mérida, Agosto 14 de 1874.—Visto este juicio de amparo promovido por los Sres. Tomas Poveda y C^a y el C. Luis Fuente, contra el C. Administrador de fondos municipales, que les está cobrando ejecutivamente el impuesto llamado de media patente, con violacion del art. 16 de la Constitucion federal. Visto el auto en que se negó la suspension del acto reclamado; lo informa-

do por la autoridad responsable sobre lo principal; el pedimento fiscal; la citacion para sentencia y cuanto mas de autos consta.

Considerando: que el administrador de fondos municipales se ha fundado para cobrar el impuesto de media patente, en la calificacion que ha hecho la junta graduadora del capital en giro de los quejosos.

Que aquella junta fué establecida por las leyes de 27 de Marzo de 1863 y 10 de Agosto de 1868, las cuales previenen, que todo comerciante debe manifestar su capital en giro, en el primer mes de cada bienio á dicha junta, compuesta en esta Capital del gefe político, del fiscal de hacienda, del subdelegado y de dos vecinos.

Que la que calificó el capital en giro de los actores el primer mes de este año, se compuso, del gefe político, del fiscal de hacienda, de dos vecinos y del rematador de contribuciones.

Que como este último no debe integrar la junta, segun las citadas leyes, sino el subdelegado, claro es que su presencia en ella ha sido intrusa, quitándole á la Junta su caracter de legitimidad; y por consiguiente su competencia constitucional, con violacion del art. 16 de la Constitucion federal.

Que por lo expuesto, la calificacion del capital en giro de los quejosos, verificada por la referida junta, ha sido ilegal, no pudiendo en consecuencia servir de base para el cobro del impuesto de media patente.

Por estos fundamentos legales, de conformidad con el parecer fiscal fundado en el art. 16 y fraccion 1^a art. 101 de la Carta federal, la autoridad, en nombre de los Supremos Poderes, falla:

1^o: La Justicia de la Union ampara y protege á los Sres. Tomas Poveda y C^a y Luis Fuente, contra actos del Administrador de fondos municipales de esta Ciudad, que les cobra ejecutivamente el derecho llamado de media patente, con violacion del art. 16 constitucional.

2^o: Sáquese testimonio de este fallo para publicar y elévense los autos originales

á la Corte Suprema de Justicia en revision, como previenen los arts. 13 y 27 de la ley orgánica de amparo, de 20 de Enero de 1869.

Hágase saber:—*I. Manzanilla.*—Ante mí: *José Anacleto Castillo.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Setiembre 23 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Yucatan por los Sres. Tomás Poveda y socios y el C. Luis Fuente, contra el C. Administrador de fondos municipales que les cobra el impuesto llamado de media patente, con violacion del artículo 16 de la Constitución federal. Visto el informe de la autoridad responsable; el parecer fiscal; la sentencia del Juez de Distrito, y

Considerando: Que la junta que hizo la graduacion del capital en giro de los quejosos, y que ha servido de base al cobro del C. Administrador de los fondos municipales, segun la ley debia componerse de cinco personas, de las cuales dos son tachadas de incompetentes por los individuos que promueven este juicio; que aun dando por probada esta tacha, las decisiones de la junta serian válidas por ser su mayoría compuesta de las personas autorizadas por la ley para ejercer las funciones de junta calificadora.

Con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitución, se declara: que es de revocarse y se revoca la sentencia del Juez de Distrito, que concedió el amparo al quejoso.

Devuélvase las actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes, archivándose á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Suprema

Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Miguel Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramirez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*S. Guzman.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Octubre 4 de 1874.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Michoacan, por el C. Lic. Matías Padilla, defensor de D^a Francisca Urtis y D. José María Amescua, contra el C. Prefecto de Morelia, que los condenó á la última pena.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

En el juicio de amparo que tiene promovido el C. Lic. Matías Padilla, como defensor de D^a Francisca Urtis y de José María Amescua, sentenciados por la Prefectura de esta Capital á la pena de muerte, por el delito de plagio cometido en la persona del Dr. D. Octaviano Valdez, figuran como hechos fundamentales de la queja, primero: ilegalidad en la aplicacion de la ley de 3 de Mayo de 1873, prorogada por la de 3 de Abril del presente, supuesto que no está justificado que sus defensos hayan cometido el delito de que se trata; segundo: incompetencia de la autoridad para conocer y fallar, no solo por la falta de pruebas, sino por no ser la autoridad aprehensora; y tercero: el haberse negado los medios de defensa.

Estos hechos que han debido ser la materia de prueba en el juicio de que se trata, son á su vez los que tienen que examinarse, con presencia de las constancias del mismo.